

SOBRE LOS ORIGENES Y LOGICA DEL TERRORISMO EN EL PAIS VASCO

Carlos Martínez Gorriarán

(Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea)
Socio de Honor de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia¹

Un pensador contemporáneo aludía hace poco al terrorismo presentándolo como una circunstancia aciaga de la sociedad actual, algo que sin duda ha de ser combatido, pero sin demasiadas esperanzas de lograr erradicarlo por completo. Como sucede con los accidentes de tráfico o las enfermedades, nadie está a salvo de verse afectado algún día por el desastre, a pesar de las muchas precauciones que adoptemos. Aunque la idea de resignarse a soportar y combatir el terrorismo como otro mal de nuestro tiempo es más que desagradable, también proporciona un enfoque que, sin relativizar su gravedad criminal, priva a los terroristas de parte del protagonismo que pretenden y tantas veces consiguen, llegando a eclipsar o anular con sus crímenes cualquier otro aspecto de la sociedad atacada.

Este último problema, el de la sobre-representación y el protagonismo exagerado del terrorismo, es particularmente claro en la sociedad vasca. El hecho es que el terrorismo etarra, la violencia política en general, se ha convertido en el emblema dominante de una sociedad que, por lo demás, es semejante a sus vecinas. La imagen de la vida social vasca está distorsionada no sólo por los actos terroristas de ETA y por el combate contra ETA, sino también por los argumentos empleados para explicar el crimen político, muy especialmente por las *explicaciones* nacionalistas. Que la imagen más extendida de la sociedad vasca y sus conflictos sea aquella fabricada por el nacionalismo -con las variantes internas que se quieran- no es, desde luego, el menor de los éxitos abertzales. Todavía es corriente que medios de comunicación europeos se refieran a ETA como una guerrilla vasca, e identifiquen a los *abertzales* como los únicos vascos verdaderos. Es un *éxito* del divulgado argumento nacionalista que entiende el terrorismo etarra como la expresión de un conflicto político soterrado de soberanía que enfrentaría al pueblo vasco con el *Estado español*. El Estado encarna aquí al *malo de la película*, a esos indeterminados agentes alóctonos que habrían privado históricamente al pueblo vasco de algunos derechos básicos, cuya restitución sería condición de justicia, y *sine qua non*, para el cese de la violencia política.

1 - El problema de las explicaciones del *terrorismo vasco*

No pretendo entrar ahora en todos los recovecos de esta retórica, ni en las ambiciones políticas -lo que está en juego, obviamente, es el poder- que están en su raíz, sino limitarme a señalar que la persistencia de una explicación de la violencia que intenta reconciliar el rechazo de la misma como *método* -perjudicial o inútil- con la comprensión de sus *razones* también es uno de los factores que explican que el auge de la violencia etarra haya ido a la par del incremento del autogobierno vasco. No se trata, claro está, de que el autogobierno vasco, instituido por el Estatuto de Autonomía - fundado en la Constitución-, sea una consecuencia de la existencia de ETA, pues el

¹ La revista Espinosa agradece al profesor Manuel Hernández Iglesias el haber facilitado este material a propósito del nombramiento Carlos Martínez Gorriarán como Socio de Honor de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia.

principio de autogobierno es muy anterior a ésta y goza de un apoyo general entre los vascos. Al contrario, si la satisfacción de las reivindicaciones de autogobierno -que hoy, en algunos campos claves, como el fiscal y el financiero, lindan con los de un Estado europeo independiente- no tiene como efecto la disminución de la violencia política, es porque no hay vínculo causal alguno entre la actividad terrorista y los problemas del autogobierno, pese a la extendida opinión que vincula el logro de una mayor satisfacción de los nacionalistas vascos con el fin del terrorismo.

El terrorismo etarra no es tanto un *fenómeno vasco* -en el sentido de algo indígena incomprendible fuera del País Vasco- como la versión local de una desventura muy cosmopolita. No pretendo, por supuesto, negar el arraigo vasco de la violencia etarra, ni nuestra responsabilidad en su actualidad. Pretendo sólo llamar la atención sobre los peligros de buscarle a ETA explicaciones de tipo étnico o etnicista. El etnicismo, la creencia de que la vasca es una etnia aparte con derechos especiales para preservar su diferencia, es de hecho un ingrediente fundamental del cóctel terrorista. Las explicaciones nativistas intentan explicar la perseverancia de ETA reduciéndola a un problema vasco incomprendible fuera de la cultura matriz y que no debe juzgarse fuera de aquella. Estas pseudo-explicaciones, muy populares en ciertos círculos antropológicos vascos y españoles, refuerzan a ETA al explicar su historia como un caso único para el cual la cultura democrática no tendría soluciones disponibles.

El problema de las explicaciones políticas del terrorismo tiene una importancia rara vez advertida por los políticos profesionales. La razón de su importancia estriba en que toda explicación de un problema social incluye las premisas de su posible solución. Dicho de otro modo, no hay explicaciones inocentes, neutras o inocuas. Por ejemplo, basta con admitir que ETA expresa algún conflicto político soterrado entre los vascos y España, para otorgarle a ETA una cierta legitimidad que, desde luego, no tiene. Y no sólo porque practique el asesinato, sino porque las reivindicaciones políticas que supuestamente guían la criminalidad etarra, como el derecho a la independencia y a la unidad territorial vasca, son perfectamente legales y expresables en el sistema democrático español (de hecho, las expresan y representan tanto HB como EA y PNV, apoyados muchas veces por IU). La existencia de ETA no expresa un conflicto subyacente que no puede expresarse de otro modo que no sea la violencia, sino que es el auténtico conflicto. ETA mata para existir, no porque haya presiones externas que la *obliguen* al homicidio. Pues bien, algo tan obvio como esto es sistemáticamente ignorado por muchos supuestos expertos en mediación en conflictos, por ejemplo por Pérez Esquivel, que se ofreció como mediador para salvar la vida de Miguel Angel Blanco (y poco menos que corresponsabilizó al gobierno español de su muerte).

El enfoque del problema terrorista que lo explica como expresión de conflictos políticamente inexpresables contribuye a reforzar el discurso terrorista -sus modos de justificación-, dándole una coherencia ideológica, una justificación de necesidad y una proyección intelectual que no tiene ni produce por sí mismo. Por supuesto, no se trata de renunciar a entender los móviles y *modus operandi* del terrorismo -pues estas páginas no dejan de ser otro intento más de entenderlos-, sino más bien de reflexionar sobre las consecuencias prácticas y teóricas de ciertas explicaciones más justificativas que otra cosa.

En el País Vasco -y por proyección en toda España- el terrorismo ocupa sin duda alguna el centro de la escena social y política, gravita pesadamente sobre la cultura y la economía, y afecta directamente a la vida de miles de personas. ETA ha tenido y tiene la capacidad de establecer la agenda de prioridades las instituciones políticas. Es verdad

que, como dicen los expertos en el tema, el conflicto vasco está lejos de ser tan grave como los terribles del Ulster o, por supuesto, de Argelia. De hecho, algún *experto* ha pretendido quitar gravedad al terrorismo vasco señalando que el número de víctimas cobradas por la carretera en cualquier "operación retorno", o los muertos por delincuencia común en cualquier gran ciudad del mundo, superan con mucho al monto de las víctimas de ETA en un año corriente. Semejantes análisis, que suelen ser completados por la indicación de lo fácil que sería cerrar un acuerdo político con los terroristas para acabar ese drama barato, ignoran que el problema no está en el número de víctimas o en el monto económico de los daños, sino en la intencionalidad y el sentido de tales muertes, en el carácter político que tienen tales sacrificios humanos, ausente en los accidentes de tráfico o en el homicidio ordinario. Los que niegan la importancia o gravedad del terrorismo son los mismos que muchas veces insisten en explicarlo como una forma de violencia política, como si por ser *político* el crimen fuera menor que siendo económico o sexual. El caso es que el crimen político, que no busca ventajas individuales sino alterar absolutamente la política de una sociedad, condicionando su destino a los designios de una minoría es, especialmente en un Estado democrático, más dañino que cualquier otro.

El problema central de la vida social en el País Vasco no se limita a la gravedad de los actos terroristas, sino al efecto deletéreo de los discursos e ideologías y de las formas de hacer política que exculpan, estimulan o bendicen las acciones terroristas. Parece que la opinión pública, a juzgar entre otros datos por los sondeos de opinión, percibe esta problemática con mayor nitidez que una clase política volcada en la gestión del día a día. Bajo el problema de las explicaciones viciosas descubrimos el de la falta de consecuencias políticas de las preferencias ciudadanas expresadas en votos. La renuencia de los partidos vascos a tratar en el Parlamento las estrategias de pacificación, sustituyendo esa asamblea pública por rondas semisecretas de consultas, la llamada Mesa de Ajuria Enea, dice mucho de las dificultades existentes para desarrollar una política democrática normal, donde las diferencias de fondo se ventilen en público y mediante debates abiertos. La diferencia de percepción entre clase política y gente corriente respecto a la gravedad del terrorismo se reveló con todo dramatismo en las movilizaciones democráticas espontáneas realizadas a raíz del secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco, el llamado "Espíritu de Ermua".

Según reveló una encuesta de opinión realizada por encargo del Gobierno Vasco los días 29-31 octubre de 1997, el 47% de los ciudadanos consultados declaraba haber participado en alguna actividad contra ETA. Respecto a la razón principal de estas movilizaciones, el 94% se declaraban hartos de ETA, el 88% añadía la necesidad de lograr la unidad contra al terrorismo, y un 83% exigía de los políticos alguna solución. La política antiterrorista del gobierno central conseguía un 41% de aprobados, y un rechazo del 40%. Preguntados sobre si el auge pacifista implicaba también la reprobación del nacionalismo democrático, el 23 % pensaba que sí y el 52% lo negaba.

Sobre el final más previsible del terrorismo, el 43% opinaba que seguiría a una tregua de ETA, y el 22% que se daría sin tregua previa. Esta última posición, equivalente a considerar que el fin de ETA será el resultado del rechazo social y de la represión policial y judicial, no de nuevas concesiones o de una negociación política - posición muy dura, rara entre la clase política vasca-, conseguía un 11% más de apoyo que en una encuesta similar del mes de marzo. Así pues, parece crecer el número de vascos que no ven relación alguna entre la mejora del autogobierno y la satisfacción nacionalista, con la finalización del terrorismo. La idea de que la obtención de más

soberanía serviría para acabar con ETA la sostenían todavía el 35% de los entrevistados, pero el 37% se manifestaban contrarios; sólo el 13% optaba por la inhibición o duda del *no sabe-no contesta*.

Eso no significa, ciertamente, que la opinión rechace la adopción de medidas pacificadora, o presentadas como tales. El 65% estaba de acuerdo en que el acercamiento de presos etarras a Euskadi podía ayudar a la pacificación, frente a un 21% que lo encontraba indiferente. El juicio contra la Mesa Nacional de HB era apoyado por el 50%, frente a un 15% de contrarios. A la pregunta de si se había abierto una nueva etapa contra ETA (a raíz del asesinato de Miguel Angel Blanco), el 72% respondía que sí, porcentaje que ascendía al 79% en el segmento de entrevistados de entre 18 y 29 años de edad. Estas respuestas no sólo demuestran que ETA no representa sino a un sector muy pequeño de la sociedad vasca -cosa tan sabida como olvidada-, sino que el abismo entre ese sector y la mayoría social crece cada día, muy especialmente entre la juventud (dato que debería servir, al menos, para desautorizar las explicaciones sociológicas que ven en ETA una protesta juvenil en expresión vasca). Ciertamente, buena parte del mérito de este cambio corresponde al terrorismo, capaz también de cohesionar a la sociedad ampliando el círculo de sus enemigos mediante ataques cada vez más brutales, como la llamada *kale borroka* (lucha callejera), un terrorismo menor dirigido contra todo tipo de bienes públicos y privados, especializado también en practicar amenazas y agresiones contra víctimas y ciudadanos disidentes.

La hegemonía asfixiante que el terrorismo y sus tramas han logrado entre nosotros está siendo combatida, de modo creciente, por la extensión de una nueva intolerancia democrática frente al uso político de la violencia, intolerancia -uso el término con toda deliberación- mucho menor entre la clase política y las élites vascas, que en este sentido van por atrás de la sociedad. Fruto de este retraso es el apoyo que las tesis del pacto político con ETA, resumidas en la llamada tercera vía, tienen entre los políticos, si bien éstos creen que sus preferencias se explican no por su menor conciencia, sino por su mejor información... Esta acusación suele indignar a la clase política, permanentemente esforzada en la enumeración de sus esfuerzos, méritos y afanes con vista a convencernos de la normalidad de nuestro sistema democrático, sistema que, de creerles, es básicamente inmune a las pretensiones terroristas -inmunidad desmentida por la creación y obras del GAL, que probaron la contaminación de terrorismo en ciertos aparatos de Estado-, de modo que la cadena de asesinatos no lograría otra cosa que producir disgustos y sobresaltos, sin alterar lo sustancial (¿la política monetaria?). Una opinión que se ha revelado no sólo desmotivadora para la ciudadanía -¿para qué enfrentarse a ETA si no es tan importante?-, sino que el tiempo está revelando su verdadera estupidez.

De lo que se trataría es de gobernar *como si ETA no existiera*, salvo los días de luto y funeral. Por desgracia, lo cierto es que toda la política vasca, como buena parte de la española, está condicionada por los actos y amenazas de ETA.

2 - Explotación de la violencia y retórica del victimismo

La cuestión de los orígenes de ETA (sobre la que hay mucho y bueno publicado) es mucho menos importante, a efectos sociales y políticos, que el problema de su persistencia y transmisión generacional. La mayor parte de quienes fundaron ETA no sólo no pertenecen hoy en día a la organización, sino que en muchos casos han abandonado y criticado duramente tanto el nacionalismo como las doctrinas mesiánicas

antisistema. Pese a que la historia de ETA es la de una larga sucesión de escisiones y fracturas internas entre una mayoría que decide abandonar las armas y un núcleo de irreductibles nacionalistas armados -más o menos teñidos de izquierdismo-, la constante principal ha sido el mantenimiento de ese núcleo armado intransigente que reconstruía y expandía la organización. Sobre todo, y esto es importante, tras el fin del franquismo: HB y la constelación de organizaciones que forman el MLNV (LAB, ASK, Jarrai, etc) aparecen en casi todos los casos después de 1976, llegando a su apogeo en la segunda parte de los años ochenta, obteniendo 210.430 votos en las elecciones al Parlamento Europeo de 1987. En las elecciones generales de 1996 obtuvo 154.853 votos, esto es, ha pasado del 19'7 % al 12'2 % (en la CAV; en Navarra obtuvo el 8'1 % de los votos en 1996).

Las escisiones anteriores (Frente Obrero, ETA-Berri, ETA VI, ETA p-m, etc.) terminaron creando o integrándose en partidos políticos izquierdistas, de breve historia tras el fin del franquismo. En la actualidad no parece probable un movimiento similar, ni de producirse serviría seguramente de mucho porque persiste el núcleo duro. Por eso no creo que el problema de los orígenes aporte mucho para entender el problema del mantenimiento, transmisión y auge de la violencia durante el proceso de instauración de la democracia española. Adelantemos la conclusión de que ello parece deberse, en primer lugar, a que durante todo este tiempo no se ha hecho frente con suficiente energía, perseverancia y legalidad a la apología y explotación de la violencia.

La probada capacidad etarra de contaminarlo todo -desde los nuevos movimientos sociales hasta el viejo sindicalismo- e imponer su protagonismo deriva de que la violencia y el terrorismo han sido explotados de diversos modos por muy diversos agentes. Dicho de otro modo, ha habido mucho interés subrepticio en que ETA siguiera amenazando. En primer lugar, lo ha tenido el nacionalismo pacífico -muy poco democrático en esto-, que en muchas ocasiones ha señalado la conveniencia de plegarse a ciertas exigencias suyas con vistas a "*quitarle razones a ETA*", táctica que en realidad refuerza al terrorismo y debilita la legitimidad democrática. La expresión más clara de esta actitud oportunista que suele llamarse "la ambigüedad nacionalista", es la dificultad, al parecer invencible para la mayoría de los nacionalistas vascos, de completar la condena de la violencia física (*los medios*) con el rechazo de los objetivos que persigue y las ideas que los justifican (*los fines*). Por ejemplo, se está en contra de matar para obtener el *derecho de autodeterminación*, pero se reclama ese presunto derecho -en realidad, un proyecto político como otro cualquiera- convertido en algo básico e irrenunciable e injustamente robado, y ello con la misma o mayor vehemencia que los partidarios del terrorismo. La manida y rudimentaria división de la acción humana en *medios* y *fines* -ambos conceptos son meras distinciones de un proceso único-, también ayuda lo suyo a la confusión sobre el sentido de la violencia.

También otros partidos han incurrido en la explotación partidaria del terrorismo: cuando el PP era la oposición al gobierno socialista, debilitado por el escándalo del GAL (otro episodio criminal que deterioró al Estado de derecho, reforzando al terrorismo), aprovechó los sentimientos revanchistas de muchos españoles para erosionar la política de reinserción de presos etarras disidentes impulsada por el gobierno, exigiendo el cumplimiento íntegro de las penas y otras medidas vengativas y gratuitas. Oportunismo dañino afortunadamente rectificado y corregido por Mayor Oreja en el actual gobierno Aznar. Tampoco cabe olvidar el modo mafioso en que ciertos personajes del PSOE, como Roldán, Aragón y Urralburu, utilizaron la lucha antiterrorista para pretexto para lucrarse, creando redes de extorsión a empresas que

trabajaban para las fuerzas policiales y otros sistemas de corrupción de muy graves efectos políticos. Hay que admitir que la existencia del terrorismo ha ofrecido, y ofrece, buena ocasión de simbiosis mafiosa, de negocios directos o indirectos, claros o encubiertos, para todo tipo de entidades: la aparición de expertos en mediación con subvención pública es otro de los ahora disponibles.

El oportunismo partidario no es el único existente, pese a la injusta proclividad general a culpar de todo a la clase política. Por el contrario, la amenaza de apoyar o entender la violencia en el caso de que ciertas exigencias particulares o de grupo no sean satisfechas, ha sido y es un recurso ampliamente explotado por multitud de grupos de presión privada presentados como iniciativas vecinales, culturales, lingüísticas, juveniles, ecológicas, feministas, etc., buena parte de las cuales acaban, si no comienzan, en la órbita de ETA.

La historia de la extorsión montada entre 1988 y 1992 a raíz del proyecto de autovía entre Guipúzcoa y Navarra (conocida como la Autovía del Valle del Leizarán), que constituyó uno de los mayores éxitos de ETA, consistió en la calculada combinación de la presión terrorista directa, mediante los atentados y chantajes habituales, con la organización y control de los movimientos contrarios al proyecto por razones ecológicas o paisajísticas; a esto se unió en la sombra la corrupción a gran escala montada por la mafia Urraburu-Roldán para beneficiarse de las *mordidas* a las empresas privadas de seguridad y otros negocios similares. *Lurralde*, supuesto movimiento social que encubría la agencia negociadora al servicio de los designios etarras, consiguió finalmente que las instituciones interesadas (Diputación Foral de Guipúzcoa y Comunidad Foral de Navarra) dieran su brazo a torcer en abril de 1992, alterando profundamente el proyecto aprobado, considerablemente encarecido en costo económico y paisajísticamente peor. Pues bien, la exitosa experiencia de *Lurralde*, que presentó la claudicación ante ETA como un éxito de *mediación democrática* -con el concurso de las instituciones claudicantes- ha servido como modelo para la creación de Elkarri (Jonan Fernández, antiguo concejal de HB en Tolosa, es el dirigente más conocido de ambas entidades).

Finalmente, pero no en último lugar en cuanto a importancia para el estímulo del terrorismo y el debilitamiento de la democracia, hay que señalar que la política vasca ha estado presidida durante mucho tiempo por una retórica del *victimismo violento* que podemos describir aquí, muy brevemente, como la secuencia de tres pasos perfectamente previsibles.

En primer lugar, un grupo invoca un deseo político o cultural privativo, pero de tal modo que sea visto como un derecho democrático minoritario. El segundo paso consiste en convertir aquel seudo-derecho de grupo en un derecho político colectivo elemental. Y el tercero, en convertirlo en un imperativo político cuyo incumplimiento conlleva poco menos que el fracaso de la democracia y el derecho a la insurrección popular, esto es, a la *lucha armada*.

Esta táctica ha sido empleada con gran éxito en múltiples campos de la actividad política y extrapolítica, desde la llamada “normalización lingüística del euskara”, hasta la actual campaña proacercamiento de presos de ETA. Un ejemplo práctico de este proceso, de momento suspendido pero de fácil reactivación cuando las circunstancias lo posibiliten, podemos encontrarlo también en la ofensiva de “*superación del Estatuto*” conducida por dos sindicatos nacionalistas, ELA y LAB, en nombre de los sectores llamados *soberanistas* del nacionalismo democrático y del nacionalismo totalitario del MLNV (feroz enemigo del Estatuto y del constitucionalismo en general). El deseo [1]

de que Euskal Herria (un País Vasco hipotético *completo*, compuesto por la CAV, Navarra y el País Vasco-francés) tenga su propia soberanía, distinta del Estatuto, se traduce en el *derecho nacionalista* [2] a superar el Estatuto, de modo que pronto sea posible convertirlo en el imperativo [3] propugnado por ETA: que si el Estatuto no se abandona en favor de una fórmula de soberanía ajena al constitucionalismo español, entonces no hay democracia en el País Vasco y es legítimo combatir con las armas. Como puede verse, el final y la finalidad previsibles de un proceso de esta naturaleza no es otro que la legitimización de ETA y la deslegitimación del Estado. Este tipo de retórica merece un estudio más atento. Opera como uno de los disolventes más potentes de la normalidad democrática, y los partidos políticos vascos han sido sumamente débiles para reconocerla y enfrentarse a ella con éxito. Quede aquí señalada, por lo menos.

3 - Violencia, nacionalismo democrático y tercera vía.

Contra lo que muchos pensaban y bastantes siguen pensando todavía, el progreso del nacionalismo vasco en la consecución de sus apetencias no ha significado una disminución de la actividad criminal de ETA, ya que no su fin. Todo lo contrario. Los datos muestran que la virulencia etarra crece después de 1975 y llega a su apogeo en los años ochenta. A comienzos de esta década parecía iniciarse una sólida reacción ciudadana contra ETA motivada, en buena parte, por los asesinatos del capitán Martín Barrios y del ingeniero Ryan (empleado en las obras de la central nuclear de Lemóniz, en Vizcaya). Esta reacción quedó desactivada o suspendida por la debilidad del Estado democrático -revelada en el episodio golpista del 23-F y en la creación del GAL- y, qué duda cabe, por el escaso vigor de la conciencia cívica y democrática en la sociedad vasca, muy autocomplaciente con su exagerada imagen de ejemplar resistente al franquismo.

Sin embargo, el suceso político más notable de los años noventa ha sido el auge del pacifismo, especialmente su *toma de la calle* -espacio que el MLNV considera suyo. En los últimos años, ETA ha intentado combatir los éxitos policiales, la actividad del pacifismo y la disidencia interna mediante varias fórmulas: el reforzamiento de la actividad política deslegitimadora del MLNV, el asesinato de disidentes (Yoyes), y la creación de un terrorismo de baja intensidad y amplia extensión: *kale borroka* y la llamada *socialización del sufrimiento*. Esta última ha causado un gran impacto en un doble sentido inesperado: ha horrorizado a nacionalistas antes muy tibios con ETA, dañando sin duda su prestigio al ampliar el círculo de sus enemigos (pues cualquiera puede ser víctima de un sabotaje o del acoso sistemático, no sólo, como antes, policías, políticos y funcionarios), pero ha demostrado su eficacia al reforzar a los partidarios de la tercera vía, esto es, la creencia de que no hay otro modo de erradicar el terrorismo que pactando con ETA -según el modelo *Lurraldea* arriba comentado, esto es, aceptando algunas imposiciones.

A estas alturas es obvio que la estrategia del pacto con ETA contribuye únicamente a reforzar el rearme moral y práctico de los etarras y sus partidarios, que contemplan la posibilidad de imponer al menos algunas de sus pretensiones si consiguen aguantar lo suficiente. Estas pretensiones están resumidas en la llamada "*alternativa democrática de ETA*"; esencialmente consisten en la declaración de una tregua -no disolución ni armisticio- a cambio del reconocimiento por parte del Estado del derecho de autodeterminación y de la unidad territorial de, al menos, la CAV y Navarra.

Importa recordar que el móvil directo del terrorismo no es otro que la debilidad electoral y política del nacionalismo extremista, cuyos objetivos son inalcanzables por vía electoral. Por eso, reitero, es absurdo considerar a ETA la expresión de un *problema vasco* previo que debe solucionarse si queremos que ETA deje las armas. Ahora bien, la mayor parte de los nacionalistas, a los que se ha unido últimamente IU con escandaloso oportunismo, se han negado tradicionalmente a asumir este punto de vista, insistiendo con mayor o menor énfasis en que el terrorismo expresa la persistencia de un problema de representación política de ciertas tesis abertzales. Esta corriente exige del Estado la adopción de medidas que permitan a ETA abandonar las armas. Aunque este enunciado suene a *boutade*, me parece que traduce muy bien lo que en realidad sostienen los partidarios de la mediación y negociación a ultranza: que los terroristas perseveran un poco contra su voluntad, obligados por la ceguera o "falta de cintura" de la autoridad; el Estado es, en última instancia, moralmente culpable de que ETA actúe. Aunque se pretende bilateral y mediador, este enfoque representa el colmo del unilateralismo.

Una frase, ya histórica, del dirigente del PNV Joseba Egibar sintetiza muy bien la mentalidad que subyace a este tercer espacio o tercera vía: "*me da más miedo España que ETA*". Parece significar que teme que una derrota *militar* de ETA conlleve una derrota ideológica del nacionalismo vasco en general. Por ésta y otras razones, el problema de la relación entre nacionalismo y violencia en el País Vasco se ha convertido en el centro de una virulenta discusión política e intelectual. La lejanía entre los grupos pacifistas más activos (sobre todo Gesto por la Paz y Denon Artean) y el nacionalismo en general -incluyendo últimamente una versión *light*, el llamado *socialismo vasquista*- es otro aspecto de este mismo problema. El nacionalismo, como ideología, ha generado corrientes pseudo-pacifistas, pero no se ha comprometido realmente con el pacifismo como proyecto cívico, seguramente porque la premisa implícita de la mayoría de este pacifismo cívico es la inexistencia de un conflicto de soberanía en el papel motor del terrorismo.

El grupo pseudo-pacifista nacionalista por excelencia, Elkarri, consiste más bien en la réplica abertzale a un pacifismo percibido como seria amenaza ideológica y política. El temor a desestabilizar el actual funcionamiento político de fondo puede explicar por qué los partidos y sindicatos, con la excepción del PP, prestan más apoyo al *realismo posibilista* de Elkarri que a unos grupos pacifistas más bien críticos con su modo de hacer política. Las posiciones de Elkarri son las más representativas de la llamada tercera vía, que postula una negociación entre el Estado y ETA. Estas posiciones están muy bien resumidas por un reciente artículo de uno de sus portavoces, Víctor Aierdi (Revista Internacional de Filosofía Política, nº 8, 1996: 167): "*Existe un gran espacio social [favorable a la negociación con ETA], cuyas señas de identidad son: primero, la violencia hoy no garantiza soluciones justas al conflicto vasco; segundo, la denuncia de la violencia debe ser multilateral: ETA y Estado; tercero, estamos ante un conflicto político que necesita una solución política: dialogada, negociada y de consenso; cuarto, la lucha por la paz debe estar unida también a la afirmación, defensa y ejercicio de los derechos humanos colectivos, es decir, a la consideración de que el pueblo vasco tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro.*"

Los límites trazados por Elkarri como propios de su "espacio por la paz" coinciden con la mayoría de la comunidad nacionalista democrática, pero también con buena parte de la nacionalista radical o izquierda abertzale. Como mucho, puede abarcar dudosamente al llamado socialismo vasquista y a IU. Sin embargo, la tercera vía rehusa someter a votación popular estas propuestas, tratando de que sean pactadas entre las

cúpulas de las instituciones afectadas -según el modelo de los pactos de Oslo para la paz israelo-palestina o del proceso de paz en el Ulster-. Y esta es precisamente su peor limitación, que la paz pretendida se haría a costa de la mitad o más de la sociedad vasca que no abriga grandes dudas sobre la radical ilegitimidad de ETA y la legitimidad del Estado democrático, que apoya el autogobierno pero no es nacionalista. En definitiva, propone una *paz abertzale* que sólo puede entenderse como proyecto de fundación de un proto-Estado vasco a la medida de la mitad de la sociedad y excluyendo a la otra mitad, lo cual no sólo es ilegítimo pretenderlo, sino también disimularlo so capa de perseguir una paz desinteresada. La parcialidad demostrada por Elkarri en todos los días de su vida disipa cualquier duda razonable sobre su militancia ideológica. Todo lo que se puede agradecer y reconocerle es su insistencia en que el terrorismo -que nunca llama así- es reprochable, una vía políticamente muerta. Su observación de que la paz necesita seguramente de nuevas fuerzas políticas y nuevos movimientos sociales (Aierdi 1996: 176) queda invalidada por la alienación militante de la propia Elkarri en un mundo nacionalista -el reunido en Gernika el 19 de octubre, convocado por el sindicato ELA para extender el certificado de defunción del Estatuto- que, precisamente, encarna la inmovilidad social e ideológica. Pero que, sobre todo, aspira a conseguir la paz a cambio de conceder ciertas victorias al terrorismo y a cambio de ignorar la representatividad electoral de las opciones políticas.

El fin de ETA y del terrorismo político no depende de un factor único. La represión policial y judicial, tan indispensables como la reinsertión de los terroristas arrepentidos, no pueden sustituir a la lucha contra la cultura de la violencia política. Los aspectos o factores culturales, ideológicos y éticos del combate contra el terrorismo son tan importantes como los policiales, políticos y jurídicos. Mientras esto no se comprenda, especialmente mientras no lo comprenda la clase política, seguirá siendo posible, si no probable, la reproducción del terrorismo y la transmisión intergeneracional de sus justificaciones.